

**Al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid**

**RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN CONTRA
LOS PLIEGOS DEL EXPEDIENTE HCCR 16/2019-SU Suministro de
material de cirugía abierta y laparoscópica para el Hospital Central de la
Cruz Roja San José y Santa Adela, mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios.**

Doña Isabel Cabo Quirós, con D.N.I nº 11.431.266-J, actuando en nombre y representación de **BARD DE ESPAÑA, S.L.U.** (en lo sucesivo, **BARD**), con CIF **B08780249**, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Europa 41-43, 5ª planta, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 08908, y respecto al **expediente HCCR 16/2019-SU, 2018/008068** referenciado comparezco ante este **Al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid**, y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

El anuncio de licitación ha sido objeto de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el 28 de agosto de 2019, habiéndose publicado los pliegos rectores del mencionado expediente el mismo día (**documento anexo nº 1**).

LEGITIMACIÓN

El Artículo 48, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, **Legitimación**, indica:

“Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.”

El recurso se interpone por persona jurídica legitimada para ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 del LCSP, toda vez que **BARD** es entidad potencial licitadora, cuyos derechos e intereses legítimos pueden verse afectados por la aplicación de los pliegos reguladores del procedimiento en análisis, toda vez que no son conformes con el ordenamiento jurídico y que son gravosos para las empresas licitadoras, determinando por ello una lesión para los intereses legítimos de esta parte, al tiempo que la estimación del recurso y declaración de ilegalidad de la actuación administrativa impugnada representa un beneficio para dichos intereses.

Asimismo se acredita la representación del apoderado que suscribe el presente recurso mediante copia de la escritura de poder que se adjunta como **Documento nº 2** y copia compulsada de su DNI como **Documento nº 3**.

ACTO SUSCEPTIBLE DE RECURSO

El artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, **Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles**, en su apartado 2º indica:

“2. Podrán ser objeto del recurso los siguientes actos:

*a) Los **anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación.**”*

El recurso se interpone contra un acto susceptible de recurso en esta vía de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1.a) de la LCSP:

“Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.”

Para poder determinar la sujeción al precitado artículo, justificamos la procedencia del recurso especial interpuesto, al referirse a la contratación de suministro sujeto a regulación armonizada, superando su valor estimado los 100.000 euros, convocado por un ente del sector público con la condición de Administración Pública y el objeto del recurso son los pliegos que rigen el mencionado expediente, por lo que el acto recurrido es susceptible del recurso especial en materia de contratación al amparo del artículo 44 –apartados 1.a) y 2.a)- de la LCSP.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO

De conformidad con el **artículo 50, apartado 1. d) de la LCSP**, el plazo legalmente establecido para interponer un recurso contra la adjudicación, es de quince días hábiles:

“Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo.

1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.”.

En este caso, la publicación de los pliegos en el perfil del contratante tuvo lugar el 28 de agosto de 2019, por lo que el *dies a quo* comenzó el 29 de agosto y el plazo de los quince días hábiles finaliza, *dies ad quem*, el 18 de septiembre de 2019, comoquiera que deben excluirse del cómputo los sábados y domingos por ser días inhábiles a efectos del cómputo de los plazos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015.

Que por el presente escrito, como empresa interesada en licitar, y conforme a lo previsto en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dentro del plazo de 15 días legalmente establecido al efecto, **interponemos Recurso especial en materia de contratación contra los pliegos que rigen el expediente de contratación HCCR 16/2019-SU**, en base a los siguientes:

MOTIVOS Y MEDIOS DE PRUEBA

PRIMERO.- Como es sabido, los Pliegos conforman la Ley del contrato y vinculan a los licitadores que concurren a la licitación aceptando su contenido y también a los órganos de contratación y vinculan en sus propios términos, (Vid. por todas STS de 29 de septiembre de 2009 o Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 128/2011, de 14 de febrero (JUR 2011/170863), de manera que los licitadores han de estar y pasar por los mismos en todo su contenido. En este sentido, recogiendo lo dispuesto en el artículo 139 del LCSP, la presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del clausulado de los pliegos sin salvedad o reserva alguna.

La regulación legal de PPT y las reglas para el establecimiento de las prescripciones técnicas de los contratos se contiene en los artículos 125 y 126 de la LCSP, debiendo incluir aquellas instrucciones de orden técnico que han de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, concretamente en el caso de los contratos de suministro los requisitos exigidos por el órgano de contratación como definidores del producto objeto de la contratación, y que por lo tanto implican los mínimos que deben reunir los productos a suministrar, así como de las prestaciones vinculadas al mismo.

Por tanto, los Pliegos constituyen la base del contrato y sus determinaciones, las reglas conforme a las cuales debe ser cumplido al determinar el contenido de la relación contractual.

Cabe recordar también que las características técnicas correspondientes a los productos objeto de suministro corresponde determinarlas al órgano de contratación de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la LCSP, y no cabe relativizarlas, ni obviarlas durante el proceso de licitación.

El **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales** ha señalado en numerosas resoluciones que:

"debe tenerse en cuenta que las exigencias de dichos pliegos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que no supongan obstáculos indebidos a los principios generales que guían la contratación administrativa (libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y eficiente utilización de los fondos públicos en conexión con el principio de estabilidad presupuestaria), recogidos en el art 1 del TRLCSP.

En este mismo sentido, se pronuncia el art 139 TRLCSP cuando exige que: "Artículo 139. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia".

Asimismo, el **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**, en su **Resolución 210/2012**, señala de forma bastante ilustrativa:

"como ya ha señalado algún sector de la doctrina, la regulación de los contratos públicos ha dejado de poner el acento en la contemplación del interés público como elemento condicionante de la regulación de los contratos públicos para pasar a ponerlo en el cumplimiento de

*determinados principios entre los que destaca la **garantía de la libre de concurrencia.**" Y ello de acuerdo con el principio de igualdad de trato referido por el artículo 1 TRLCSP, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia del TJUE -de la que resulta que **el principio de igualdad de trato prohíbe cualquier forma encubierta de discriminación** (entre otras, SSTJUE de 5 de diciembre de 1989, 16 de enero de 2003, y 1 de julio de 2004)-, así como el artículo 117 TRLCSP que establece que los pliegos deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la competencia. Por lo demás, no debe desconocerse que **un régimen jurídico que facilite el acceso y favorezca la competencia de forma efectiva constituye un requisito imprescindible para llevar a cabo un gasto público eficiente**, premisa en la que se justifica este Acuerdo marco."*

En el presente caso, tras la doctrina expuesta, es evidente que la redacción del pliego de condiciones no sólo limita y restringe artificialmente la concurrencia sino que no es ajustado a derecho, toda vez que **la división del contrato no ha sido justificada ni motivada por el organismo.**

Una de las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, es la división en lotes del objeto del contrato. Así lo regula en su artículo 99.3:

"Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse

debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras”

Para poner en situación al Tribunal, el órgano de contratación establece la división de los productos requeridos de la siguiente manera:

1.- Definición del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la adquisición de material de cirugía abierta y laparoscópica con destino al Hospital Central de la Cruz Roja, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

División en lotes: [Si]

Código CPV: 33140000-3 Material médico fungible

Número y denominación de los lotes: 4 lotes

Lote	Nº Orden	Denominación	Cantidad	Precio unitario s/IVA	Precio Unitario c/IVA
1	1	Pinza Mosquito Sellado de vasos y corte cirugía abierta	240	430,00	520,30
	2	Maryland, Pinza Sellado de vasos y corte laparoscópica	168	530,00	641,30
2	3	Carga articulada de 60mm para tejido vascular/mediano	144	194,00	234,74
	4	Carga articulada de 45mm para tejido vascular/mediano	24	166,00	200,86
	5	Carga articulada de 60mm. para tejido medio/grueso	54	194,00	234,74
	6	Carga articulada de 45mm. para tejido medio/grueso	24	166,00	200,86
	7	Carga articulada de 60mm. para tejido medio/grueso con lámina de refuerzo	474	320,00	387,20
	8	Carga articulada de 45mm. para tejido mediano/grueso con lámina de refuerzo	168	292,00	353,32
	9	Protector mango electrónico	144	220,00	266,20
3	10	Pinza ultrasónica	192	380,00	459,80
4	11	Endoaplicador clip	624	80,00	96,80
	12	Endoaplicador Helicoidal Malla	80	258,00	312,18

Tras las imágenes que anteceden, como hemos podido apreciar, el organismo sólo ha establecido en el pliego de condiciones la forma de división del objeto de contrato en lotes y sublotos, pero **en ningún caso ha aportado información relevante acerca de la motivación que le ha llevado a realizar dicho fraccionamiento, para el lote 4,** siendo el que nos compete, aunque la misma argumentación podría aplicarse al resto de lotes.

Según se desprende del artículo 46 de la Directiva 2014/24 "los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes", por otro lado señala también que "los poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes". **De esta redacción se deduce que la decisión de dividir o no un contrato en lotes es parte de la facultad del órgano de contratación para fijar discrecionalmente el contrato** (ver, por ejemplo, las Resoluciones 76/2016, 84/2017 y, especialmente, 41/2015 del OARC / KEAO), **siendo necesario que se justifique el criterio que se ha seguido para configurar dicha división.** Esta conclusión se refuerza por el Considerando 78 de la Directiva 2014/24, que indica que *"la magnitud y el contenido de los lotes deben ser determinados libremente por el poder adjudicador" y que éste "debe estar obligado a estudiar la conveniencia de dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial."*

Esta última mención no debe entenderse como una patente de inmunidad absoluta frente al control jurídico, pero sí como una advertencia de que dicho control no puede entrar a valorar las razones de oportunidad alegadas por el órgano de contratación, ámbito que se identifica sustancialmente con el llamado "núcleo material de la decisión" de la discrecionalidad técnica.

La principal novedad de la Directiva, que ha de servir de criterio interpretativo del artículo 99 de la LCSP, una vez expirado el plazo de transposición, es que la división del objeto del contrato en lotes deja de ser la excepción y se convierte en regla general

debiendo constar en el expediente informe motivado de las razones por las que ha decidido no subdividir en lotes.

Tras la doctrina expuesta, aplicada al caso que nos concierne, resulta clara la discrepancia que tiene esta parte ante la actuación del órgano de contratación a la hora de redactar el pliego de condiciones, ya que la ausencia referida, imposibilita a las empresas licitadoras entender e interpretar el porqué de tal fraccionamiento.

En este contexto y basándonos en el lote 4 que compete a esta parte, entendemos que el fraccionamiento del mismo no es correcto. Toda vez que **el Endoaplicador clip y el Endoaplicador Helicoidal Malla** forman parte de un mismo conjunto en el mencionado lote, cuando **son productos que cumplen funciones dispares en quirófano.**

- El aplicador de clips: se utiliza en técnicas endoscópicas para lograr la oclusión de vasos y otras estructuras tubulares pequeñas y para poner marcas radiológicas.



- El endoaplicador de sistema de fijación de mallas: está indicado para unir partes blandas y fijar la malla quirúrgica a tejidos durante procedimientos quirúrgicos laparoscópicos o abiertos, tales como herniorrafias.



Así lo han apreciado la mayoría de los organismos a la hora de ejecutar sus pliegos, por ejemplo la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en su AM 255/2017, fraccionó los lotes de forma individual, como se desprende en las siguientes imágenes. Dado que concibe que son productos que no constituyen una unidad funcional, ya que sus funciones y usos son heterogéneos.

ENDOAPLICADOR DE CLIPS	
37	ENDOAPLICADOR DE CLIPS. Eje de 10 mm de diámetro. Tamaño pequeño (clip cerrado de 5-7 mm)
38	ENDOAPLICADOR DE CLIPS. Eje de 10 mm de diámetro. Tamaño mediano.(clip cerrado 8-9 mm)
39	ENDOAPLICADOR DE CLIPS. Eje de 10 mm de diámetro. Tamaño grande. (clip cerrado 10-12 mm)
40	ENDOAPLICADOR DE CLIPS. Eje de 5 mm de diámetro.

ENDO/APLICADOR DE ANCLAJES	
46	ENDOAPLICADOR DE ANCLAJES METÁLICOS Tipo helicoidal Para fijación de mallas
47	ENDOAPLICADOR DE ANCLAJES ABSORBIBLES Tipo anzuelo Para fijación de mallas
48	ENDOAPLICADOR DE ANCLAJES ABSORBIBLES Tipo helicoidal Para fijación de mallas

En el presente y a la vista de lo antedicho, es evidente que constituye un supuesto extraño dentro de la contratación pública el que nos ocupa, ya que se incluyen en un procedimiento de concurrencia factores que imposibilitan la misma.

SEGUNDO.- Ausencia de Memoria Justificativa

En este sentido, en virtud de la nueva regulación introducida por LCSP la **configuración del objeto del contrato y su organización debe estar debidamente justificada en el expediente preparatorio, en concreto en el documento memoria justificativa del expediente.**

Esta imposición legal de justificación, viene explícita en lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP, que en el punto 3.a) indica:

“3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información:

- a) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del*

procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente”.

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid constan varios documentos publicados, pero **sólo se halla una memoria justificativa en relación a la memoria económica del procedimiento**, que nada tiene que ver con lo establecido por la normativa vigente, ya que en el mencionado documento debería constar la justificación de todos los extremos del contrato.

Resulta muy ilustrativa la **Resolución nº 31/2018 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, de 28 de febrero de 2018**, que establece (traducción nuestra):

*“Ahora bien, como se ha dicho, la potestad que tiene el órgano de contratación en la configuración del objeto contractual **va unida de la obligación de justificación y motivación de los elementos esenciales de la contratación oferta**. Y, en el caso objeto de análisis, se aprecia que el expediente remitido por el órgano de contratación al Tribunal con motivo de los dos recursos presentados **no contiene el informe justificativo o memoria donde se contengan las motivaciones exigidas en la normativa en materia de contratación pública**. A pesar de que este hecho no haya sido objeto de alegación a ningún efecto para las recurrentes, no obsta a que sea tenido en cuenta por este Tribunal. Ciertamente, **la falta de expresión en el expediente de las motivaciones, justificaciones y finalidades de la configuración de los elementos esenciales de la contratación y, en particular, de la no división en lotes, no permiten a este Tribunal formarse un juicio para emitir su resolución, salvo que, allí sí, el órgano de contratación ha argumentado en el informe del artículo 46.2 de la LCSP.***

Tal y como este Tribunal ha expresado en su reciente Resolución núm. 18/2018, el artículo 22 de la LCSP, que prevé la necesaria justificación y motivación de los

elementos esenciales de los contratos, tiene, sin duda, una vinculación directa con el logro de los fines establecidos en el artículo 1 del mismo TRLCSP y, en particular, la garantía de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato, y garantía -en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto- de una eficiente utilización de los fondos públicos, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (en este sentido, por todas, las resoluciones de este Tribunal núm. 147/2017 y 173/2016 y las resoluciones del TACRC núm. 363/2017, 262/2017 y 530/2016).

*Asimismo, cabe afirmar que **la justificación exigible de los elementos esenciales de la contratación con carácter previo y / o en el propio pliego de la licitación no pueden ser suplidos por las argumentaciones y motivaciones que pueda esgrimir el órgano de contratación en el informe emitido con ocasión del recurso interpuesto** ex artículo 46.2 de la LCSP (en este sentido, la Resolución núm. 18/2018 apenas citada, así como las núm. 176/2017, 152/2017, 195/2015, también de este Tribunal, Acuerdo 9/2017 del TACP y la Resolución núm. 47/2016 del OARC de Euskadi).*

Llegados a este punto, procede, además, una reflexión -sin ánimo de exhaustividad y referida al tema objeto del recurso- sobre el papel de los pliegos en el procedimiento de licitación y la necesidad de motivación. Efectivamente, los pliegos -o el documento que resulte equivalente- constituyen el elemento esencial del procedimiento de licitación y de la futura contratación, en la medida que son el instrumento de establecimiento y regulación del catálogo de elementos definitorios que el órgano de contratación ha adoptado para el diseño de la contratación. Así, se contienen, en general, todas las características técnicas, jurídicas y económicas de la contratación y, en particular, los aspectos de mayor impacto en la garantía de los principios rectores de la contratación pública, como la propia configuración de la objeto del contrato, las condiciones de

solvencia que deben reunir las empresas licitadoras, los criterios de adjudicación y las condiciones de ejecución.

*Es por todo ello que, con carácter previo, **el expediente de contratación debe contener, necesariamente, la expresión de las motivaciones que, con el fin último de conseguir la mejor y más eficiente solución posible para la necesidad pública planteada, justifican el diseño de los elementos esenciales de la contratación.** Y, efectivamente, esta motivación resulta necesaria, en primer término, como lo es para cualquier acto administrativo, para articular con seguridad jurídica la discrecionalidad técnica de que pueden disponer los órganos de contratación en sus ámbitos de actuación y evitar así la arbitrariedad en sus decisiones, pero, además, en el caso de las decisiones expresadas en los pliegos -que, recordemos, son objeto de aprobación expresa por el órgano de contratación al aprobarse el expediente ex artículos 110 y 115.4 del TRLCSP- también resulta **necesaria para hacer posible la tutela judicial efectiva y evitar la indefensión de los interesados a la hora de poder reaccionar contra aquellas mediante el sistema de recursos establecido.** En otras palabras, la motivación de los elementos esenciales que configuran las contrataciones debe ser conocida por los posibles interesados, al menos, a partir del momento en que los pliegos de la licitación son objeto de conocimiento por aquellos. Tanto es así que la LCSP prevé también en su artículo 63.3.a) la obligación de publicación en el perfil de contratante de la memoria justificativa del contrato.*

*Dado que la discrecionalidad técnica de la que goza el órgano de contratación reduce las posibilidades de control a la apreciación de error manifiesto o en la inobservancia de los elementos reglados, y no permite una evaluación alternativa a la efectuada por el órgano calificador, **difícilmente se puede considerar que el informe acreditativo de la necesidad e idoneidad del contrato se trata de un requerimiento meramente formal del expediente y, por el contrario, se debe considerar un elemento sustantivo necesario para que se pueda llevar a cabo la función revisora de dicha discrecionalidad** (en este sentido, el Informe de la*

*JCCA CAT, núm. 15/2012, de 30 de noviembre). Sin embargo, en el caso examinado, como se ha dicho, **no se llega a apreciar los motivos de la configuración del objeto del contrato en un único lote, con la justificación y razonabilidad necesaria dentro de los márgenes de discrecionalidad del órgano de contratación**".*

Por todo ello, **BARD** considera que debe anularse la presente licitación, no sólo por la falta de motivación y un mal fraccionamiento sino por no haber sido elaborada una memoria justificativa en los términos exigidos en el artículo 63 LCSP. De hecho, la nulidad de los pliegos por no incorporar toda la motivación y justificación exigida legalmente en la memoria justificativa del expediente, ha sido también reconocida por el **Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Comunidad Autónoma de Canarias, en su resolución 184/2018, de 29 de octubre.**

Por lo anteriormente expuesto,

S O L I C I T A M O S

Que ante la irregularidad realizada por el Órgano de Contratación, por las razones expuestas en los **MOTIVOS Y MEDIOS DE PRUEBA**, la estimación del recurso frente al pliego de condiciones, por el que se rige el expediente **HCCR 16/2019-SU** y tras las oportunas actuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas de procedimiento y sustantivas aplicables, se dicte resolución por la que se anule dicho documento, para que se proceda a la modificación del mismo en los términos expuestos en el presente recurso.

En este supuesto, es evidente que el pliego impugnado incurre en infracciones de preceptos legales. Ello comporta indefectible y necesariamente la invalidez del mismo.

- Que se acuerde la suspensión del procedimiento de adjudicación para la contratación del Suministro de material de cirugía abierta y laparoscópica para el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela, sobre la base del artículo 49 de la LCSP, según dispone, se podrá adoptar medidas cautelares destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión, o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.

En L'Hospitalet de Llobregat, 16 de septiembre de 2019.

Fdo. Isabel Cabo Quirós
Apoderada

BARD DE ESPAÑA, S.L.U.